

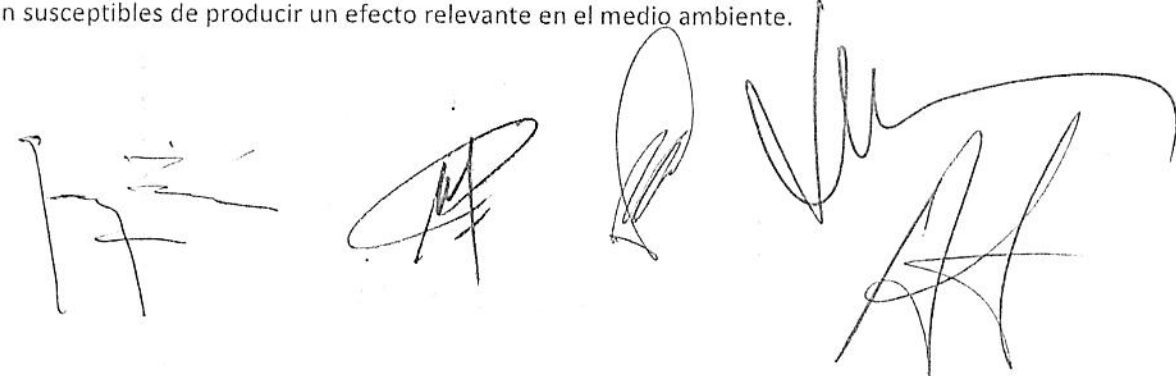
La Asociación Vecinal "Defiende tu barrio", junto a la Asociación Libertad a los Consumidores, el Defensor del Pueblo todos con domicilios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Sr. Edelmiro Rodríguez, domiciliado en la provincia de Buenos Aires, interponen demanda contra el Estado Nacional (EN), solicitando se declare la nulidad absoluta de la Resolución N° 15/2015, dictada por el órgano ambiental competente nacional, que aprobó la instalación de una planta de tratamiento y relleno de seguridad de residuos peligrosos o industriales. Fundan su petición en la existencia de vicios graves en ese acto administrativo, en especial la omisión del procedimiento esencial previo a su emisión, ya que fue dictado sin la realización de la audiencia pública sobre la proyecto de construcción y funcionamiento. El mencionado procedimiento, según afirman, viene exigido por las normas constitucionales, la Ley 25675 de presupuestos mínimos medio ambiental, la Ley 25612 de gestión de residuos industriales y de actividades de servicio y sus normas complementarias y reglamentarias.

Destacan que no puede considerarse como cumplido ese requisito con la audiencia pública realizada el 2 de enero del año 2011 por cuanto en esa oportunidad, además de los vicios que contenía su llamado y que fueran expuestos en el amparo deducido en legal tiempo y forma en ese año, fueron debatidos los términos del proyecto para la planta y relleno de seguridad cuyas dimensiones resultaban la cuarta parte del actualmente aprobado y, además su localización, si bien afectaba también en forma clara e indiscutible a las jurisdicciones de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se encontraba a varios kilómetros de distancia del originalmente planteado. Allí se analizó el estudio de Impacto Ambiental realizado sobre esas particulares características.

Es de resaltar que toda la documentación técnico-legal exhibida y analizada en esa audiencia pública hacía referencia a otro proyecto de dimensiones completamente diferentes, una tecnología totalmente distinta y otra localización, de modo que los datos de estudios ambientales del terreno, procesos productivos y de construcción, de ninguna manera cumplen con el requisito de actualidad de la información.

Reiteran que más allá de los vicios que tuvieran los actos citados y el procedimiento de audiencia pública, en ella se debatieron las diferentes cuestiones que llevaron al Estado Nacional a aprobar el proyecto. Sin embargo, debido a las incidencias judiciales que legalmente se llevaron a cabo, el EN decidió modificar los términos del proyecto, tal como quedara expuesto precedentemente, lo que de ninguna manera refleja nada de lo tratado en una audiencia pública realizada más de 4 años antes. Por otra parte ponen de relieve que no sólo no se llamó a audiencia para este nuevo proyecto sino que no se dispuso ningún otro tipo de participación.

Por esta razón solicita la nulidad absoluta de la Resolución N° 15/2015 por contener vicios graves, tales como, falsa causa, falta de fundamentación normativa seria y omisión a los procedimientos obligatorios previos a la emisión del acto y del principio de participación pública en proyectos que sean susceptibles de producir un efecto relevante en el medio ambiente.



El Estado Nacional negó que no se hubiera realizado la audiencia pública obligatoria, que la aprobación careciera de fundamentación técnica adecuada y que se hubiera impedido la participación popular.

Previo a fundar su posición planteó la falta de legitimación activa de todos los actores, en el caso de las asociaciones por no estar en debidas condiciones legales para hacerlo, para el defensor del Pueblo por carecer de una designación regular y por los fundamentos de varios fallos de la CSJN que citó y al ciudadano Rodríguez por no tener atribuciones suficientes para arrogarse la representación de ninguna clase ni colectivo público, ya que no existe acción popular.

En cuanto al fondo de la cuestión planteó que el Estado Nacional cumplió con todos y cada uno de los pasos y procedimientos constitucionales, legales y reglamentarios. En un extenso apartado de su contestación de demanda citó y analizó las principales normas que consideró aplicables y abundó en detalles sobre la formulación técnica en base a la documentación que fuera criticada pormenorizadamente en la audiencia pública llevada a cabo. Agregó que el Estudio de Impacto Ambiental fue realizado ya que siempre se reconoció que el proyecto era susceptible de producir efectos relevantes en el medio ambiente y por el tipo de proyecto de que se trata.

Continuó expresando que, si hubo una demora de 4 años en la concreción del nuevo proyecto fue precisamente por el accionar de algunos de los co-actores que mediante la presentación de amparos obtuvieron medidas cautelares que impidieron finalizar el procedimiento y que fueron definitivamente rechazadas por el tribunal de alzada a principios del año 2014.

Demás está decir que a fin de darle un cierre a la problemática planteada, el Estado Nacional se comprometió a realizar ajustes al proyecto a efectos de actualizar la situación debido al importante paso del tiempo, del que reiteran, no fue imputable al EN. Una vez completado el trámite, los departamentos técnicos y altamente especializados del órgano ambiental nacional analizaron la situación y se dictó la resolución que los actores impugnan.

Aclaran que la ley asegura la realización de una audiencia pública u otra participación en una instancia al menos, antes del dictado del acto, lo que se encuentra perfectamente cumplido, (según Decreto PEN 1172/03).

A su vez expresó que la fundamentación al ser tan extremadamente técnica no puede ser volcada en su integridad a la motivación del acto, razón por la cual se hace referencia globalmente a las medidas de mitigación del medio ambiente.

Solicitan en consecuencia se rechace la demanda presentada.

Resueltas ya todo tipo de incidencias previas, redacte la sentencia con la que resolvería las cuestiones conflictivas planteadas en el caso. Se adjuntan algunas de las normas específicas que podrían resultar de interés.



POLITICA AMBIENTAL NACIONAL

Ley 25.675

LEY GENERAL DEL AMBIENTE

Bien jurídicamente protegido

ARTICULO 1º — La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.

ARTICULO 2º — La política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objetivos:

- a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas;
- b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria;
- c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión;
- d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales;
- e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;
- f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica;
- g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;
- h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal;
- i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma;
- j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional
- k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.

ARTICULO 3º — La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden público, **operativas** y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta.

Principios de la política ambiental

ARTICULO 4º — La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política Ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios:

Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.

Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.

Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.



Evaluación de impacto ambiental

ARTICULO 11. — Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución,

ARTICULO 12. — Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados.

ARTICULO 13. — Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.

Participación ciudadana

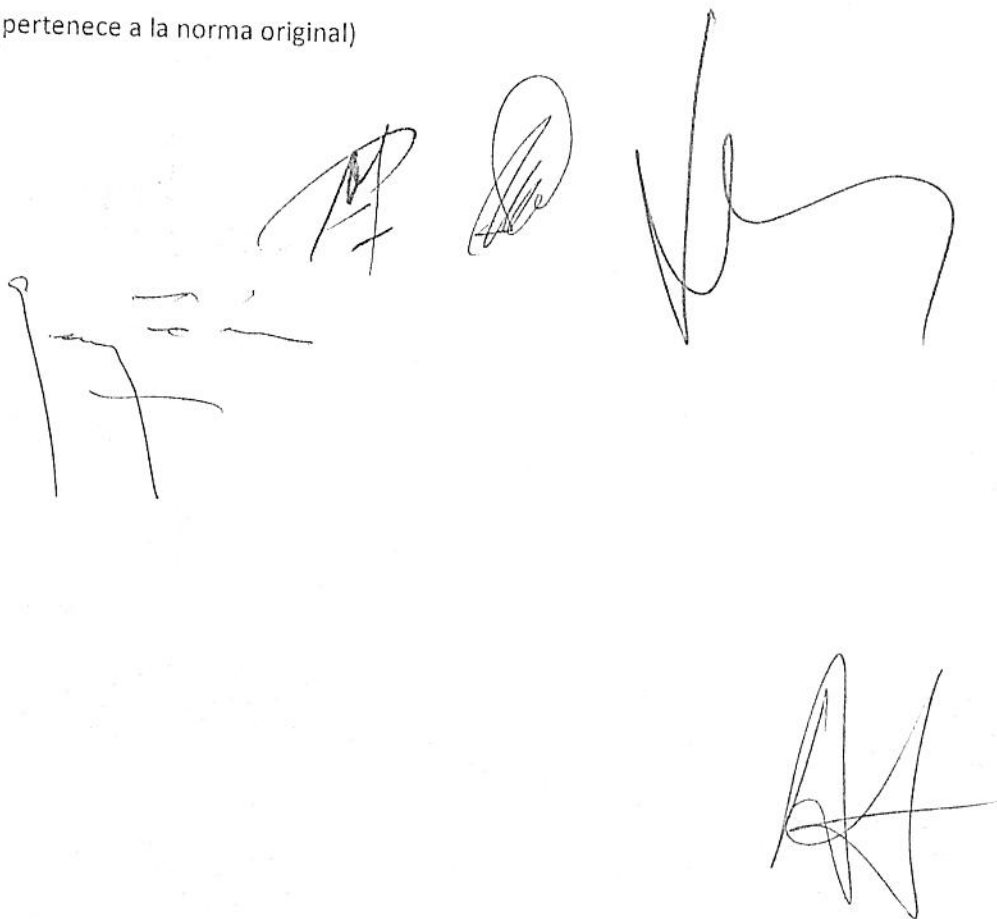
ARTICULO 19. — Toda persona tiene derecho a **ser consultada** y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general.

ARTICULO 20. — Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente.

La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública.

ARTICULO 21. — La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados.

(el destacado pertenece a la norma original)

The block contains several handwritten signatures and marks. At the top right, there is a large, stylized signature. Below it, on the right side, is another signature. In the center, there are three distinct marks: a signature on the left, a circular stamp or mark in the middle, and a signature on the right. At the bottom right, there is a large, bold signature. The bottom of the page is divided by a horizontal line, with a vertical line extending downwards from the right side.

6

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS
Ley 25.612

Gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios

TITULO I

Capítulo I

De las disposiciones generales

ARTICULO 1º — Las disposiciones de la presente ley establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional, y sean derivados de procesos industriales o de actividades de servicios.

Se entiende por proceso industrial, toda actividad, procedimiento, desarrollo u operación de conservación, reparación o transformación en su forma, esencia, calidad o cantidad de una materia prima o material para la obtención de un producto final mediante la utilización de métodos industriales.

Se entiende por actividad de servicio, toda actividad que complementa a la industrial o que por las características de los residuos que genera sea asimilable a la anterior, en base a los niveles de riesgo que determina la presente.

ARTICULO 2º — Se entiende por residuo industrial a cualquier elemento, sustancia u objeto en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso industrial, por la realización de una actividad de servicio, o por estar relacionado directa o indirectamente con la actividad, incluyendo eventuales emergencias o accidentes, del cual su poseedor productor o generador no pueda utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo.

ARTICULO 3º — Se entiende por gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicio al conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que comprenden las etapas de generación, manejo, almacenamiento, transporte, tratamiento o disposición final de los mismos, y que reducen o eliminan los niveles de riesgo en cuanto a su peligrosidad, toxicidad o nocividad, según lo establezca la reglamentación, para garantizar la preservación ambiental y la calidad de vida de la población.

ARTICULO 4º — Los objetivos de la presente ley son los siguientes:

- a) Garantizar la preservación ambiental, la protección de los recursos naturales, la calidad de vida de la población, la conservación de la biodiversidad, y el equilibrio de los ecosistemas;
- b) Minimizar los riesgos potenciales de los residuos en todas las etapas de la gestión integral;
- c) Reducir la cantidad de los residuos que se generan;
- d) Promover la utilización y transferencia de tecnologías limpias y adecuadas para la preservación ambiental y el desarrollo sustentable;
- e) Promover la cesación de los vertidos riesgosos para el ambiente.

ARTICULO 5º — Quedan excluidos del régimen de la presente ley y sujetos a normativa específica:

- a) Los residuos biopatogénicos;
- b) Los residuos domiciliarios;
- c) Los residuos radiactivos;
- d) Los residuos derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves.

ARTICULO 6º — Se prohíbe la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos, provenientes de otros países al territorio nacional, y sus espacios aéreo y marítimo; con excepción de aquellos residuos que por reglamentación sean incluidos, previamente, en una lista positiva, aprobados por la autoridad de aplicación y que los interesados demuestren, en forma fehaciente, que serán utilizados como insumos de procesos industriales. Asimismo, cabe la excepción para el tránsito de residuos previsto en convenios internacionales.

